

MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA DOMINICANO (PCD)

ANTE EL NUEVO GOBIERNO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)

Proyecto de Digitalización Academia Dominicana de la Historia





MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA DOMINICANO (PCD)

ANTE EL NUEVO GOBIERNO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)

Los resultados del proceso electoral de mayo de 1982 introducen y revelan variaciones y factores en la vida política nacional que requieren ser ponderados por nuestro partido para formular los lineamientos tácticos que normarán su conducta política respecto al nuevo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, sobre la base de una ya definida estrategia que impugna el sistema capitalista vigente y propulsa la revolución socialista en nuestro país.

Ese proceso electoral y los factores básicos que lo condicionaron han determinado la continuidad del PRD en el ejercicio del poder político, ahora con un mayor control sobre los tres poderes del Estado y ha dado lugar a la conformación de un nuevo equipo gubernamental, que bajo la presidencia de Salvador Jorge Blanco, a través de la aplicación del Programa de Concentración Nacional y dentro de los marcos del capitalismo dependiente dominicano y de la democracia representativa, promete la "erradicación de la pobreza crítica", el avance sustancial hacia una "democracia económica", reducir "sustancialmente" la tasa de desempleo", "eliminar el analfabetismo", "mejorar el nivel de salud y alimentación" e implementar la "moralidad administrativa"; todo estoen el marco de una situación general en que, a tiempo que se ha reafirmado la democracia política capitalista gravita con fuerza una alarmante profundización de la crisis económica y un reciente deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares.



II PROFUNDIZACION DE LA CRISIS ECONOMICA

Dos Metodos y una Sola Crisis

A partir de la caída de Trujillo, las diversas políticas económicas aplicadas dentro de un modelo de desarrollo capitalista esencialmente exportador, dependiente del imperialismo, concentrador de la propiedad y del ingreso, explotador y excluyente de las mayorías nacionales, han conducido la República Dominicana a una crisis cada vez más aguda y más reveladora de la necesidad de reemplazar las estructuras económicas y sociales generadoras de esas políticas y de esos problemas.

En grandes líneas, el proceso de desarrollo capitalista dependiente dominicano ha estado marcado, incluso en sus períodos de mayor expansión, por los efectos favorables del incremento de los precios del azúcar y de otros productos de exportación, así como por una marcada tendencia al agravamiento de los déficits económicos y de los problemas que afectan a las mayorías nacionales.

A grandes rasgos, sin negar sus efectos particulares, puede afirmarse que ni la concepción de política económica que primó durante el régimen de Balaguer, ni la llamada política de la "demanda inducida" que normó en ese terreno la conducta del recién finalizado gobierno del PRD, inspirada en los esquemas económicos del Consejo de Estado y del Triunvirato, y promovidas por fuerzas sociales semejantes, han logrado detener esa tendencia.

La crisis hoy es mucho más aguda. Del estancamiento se pasó a la expansión y de la expansión otra vez al estancamiento. Cada día, relativamente, la insuficiencia en la producción es mayor, la penuria de divisas se torna cada vez más alarmante, la dependencia es mayor y el endeudamiento se amplía; el desempleo, el subempleo y la miseria crecen, las desigualdades externas e internas se ensanchan, el modelo histórico de desarrollo se agota, las políticas económicas burguesas fracasan, y la crisis estructural se tornó menos manejable.

El Balaguerismo

En el curso del régimen balaguerista y específicamente durante el período comprendido entre 1969-1974 se produjo el más alto nivel de crecimiento de la economía dominicana en la etapa post trujillista: el PBI creció a una tasa promedio del orden de 10 por ejento, considerada entre las más altas a nivel internacional.

Ese notable crecimiento fue el resultado de una política, apoyada en una confluencia extraordinariamente favorable de factores externos, que posibilitaron la expansión del crédito y la inversión tanto pública como privada, en un marco fuertemente represivo contra la clase trabajadora, y en un período en que todavía el precio del petróleo no había repuntado hacia niveles muy altos.

Esa política, enmarcada dentro de un modelo de desarrollo basado fundamentalmente en las exportaciones y la concentración del ingreso, se caracterizó por amplias concesiones al capital extranjero, por un elevado endeudamiento externo. nor la reducción de los gastos corrientes del Estado y el deterioro de los servicios públicos por una rápida expansión del circulante y los créditos bancarios, por la austeridad, por un incremento de los precios acompañado de la congelación de salarios favorable al capital y al crecimiento de los ahorros de la burguesía sobre todo con la política de construccines, por la ampliación de la burguesía y de las capas medias urbanas y por una alta inversión pública con una fuerte carga de "irracionalidad" y nuevos incentivos a la industrialización dependiente dentro del esquema de la llamada sustitución de importaciones.

Pero esa política económica y sus temporales efectos dinamizadores no tardaron en provocar o acentuar una serie de problemas que pusieron en entredicho su propia efectividad.

Como era de esperar, el crecimiento económico señalado tuvo lugar junto a un proceso inflacionario que empeoró las condiciones de vida de la mayoría de la población, a una mayor concentración de la propiedad y del ingreso, al aumento del desempleo y la marginalidad, al incremento del déficit en la balanza de bienes y servicios, a la multiplicación de la deuda externa, a la acentuación de la dependencia económica y a la imposibilidad de dinamizar el sector agropecuario.

En síntesis, la expansión capitalista de esos años, y las modificaciones que ella introdujo en el plan social, fundamentalmente apoyada en una coyuntura externa muy favorable, no pudo satisfacer las crecientes necesidades de la población, sino que sus efectos, en término del reforzamiento numérico de la burguesía y de la promoción y expansión de las capas medias urbanas, conllevó el incremento de las penurias de las masas populares la acentuación de las desigualdades sociales y la acumulación de grandes presiones sociales y económicas.

A esto siguió la depresión de esa favorable coyuntura externa, y el inicio del proceso de agotamiento del crecimiento económico dentro del modelo vigente hasta desembocar, después de un cambio de gobierno y de política económica, en



un estancamiento caracterizado por la agudización de todos los efectos negativos señalados.

El Perredeísmo Tutelado por los Cívicos

Cuatro años de aplicación de otra política económica, promovida por los grupos de poder económico hegemónicos dentro del gobierno del PRD, acompañada de oscilaciones en los precios de los productos exportables (entre ellos, los más altos promedios históricos en venta de azúcares, registrados en 1981) y de un ascenso extraordinario de los precios del petróleo y de los volúmenes de importaciones, concluyen en una evidente agudización de la crisis.

Cuatro años de nueva vigencia de una orientación de desarrollo capitalista sustentada por el llamado grupo cívico, esta vez aliado e integrante del gobierno del PRD, han concluido en un rotundo fracaso, sobre todo si se examina el cuadro general desde el punto de vista de los intereses nacionales y de las masas populares dominicanas.

A raíz del ascenso del PRD al gobierno y en medio del agotamiento de las variables externas favorables al crecimiento, se puso en práctica una política económica fundamentalmente basada en el endeudamiento externo y en el estímulo a la demanda interna a través de un incremento exagerado —y en buena medida dispendioso— de los gastos corrientes del Estado, a costa de la inversión pública.

La evolución y los resultados de esa política y del conjunto de la situación pueden sintetizarse de la siguiente manera:

- *) Desde el año 1978 las tasas de crecimiento del producto se estancaron registrando niveles reales promedio anual inferiores al 3 por ciento.
- *) A partir del año 1975 el precio del principal renglón de exportación comenzó a declinar. Posteriormente sólo el oro conservó su crecimiento hasta el año 1981. El azúcar volvió a experimentar una notable alza en el año 1980 hasta alcanzar los 40 centavos por libra para deprimirse en los años de 1981 y 1982 hasta poco más de los 6 centavos la libra; alcanzando, como hubo de señalarse, los más altos precios históricos promedio en el año 1981 en las ventas dominicanas, y al mismo tiempo una baja en el volumen total entregado como consecuencia del deterioro administrativo del sector estatal

En estas circunstancias, las entradas de divisas por ese concepto descendieron con oscilaciones positivas en el año 1979 y en el 1980. Los déficits acumulativos en ese orden y el incremento de las obligaciones en materia de endeudamiento externo (pago de intereses y amortizaciones) han provocado un empeoramiento de la crisis del sector externo hasta el punto que el actual nivel de exportaciones no permite ni siquiera cubrir a plenitud la factura petrolera, las amortizaciones, los intereses y las remesas de la inversión extranjera. En el año 1981 las exportaciones





totales ascendieron a 961 millones de dólares y sólo esos compromisos alcanzaron los 1,100 millones, arrojando un déficit de 139 millones de dólares.

Las importaciones por el contrario han sido siempre crecientes tanto por el incremento de los precios de los bienes y servicios extranjeros como por el aumento de su volumen, en mayor medida presionados por una "demanda inducida" que no puede ser satisfecha por un aparato productivo nacional raquítico y deformado. Si en el año 1977 las importaciones rotales fueron del orden de los 1,108 millones, en el año 1979 fueron de los 1,411.5 y en el 1981 alcanzaron los 1,450.2 millones.

El endeudamiento externo se ha convertido en el instrumento fundamental de financiamiento de los déficits, de las actividades de acumulación de la clase capitalista y del débil crecimiento económico registrado.

Las funciones más importantes de incremento del capital (conversión del ahorro interno en divisas para la inversión, expansión del volumen de los negocios comerciales, expansión del crédito bancario, realización de las actividades de construcción) no pueden realizarse con el actual flujo de divisas que genera la producción exportable, y, en tal virtud, la clase dominante ha optado por un endeudamiento externo altamente oneroso y con escasísimas repercusiones en el aparato productivo.

De 1977 (1,033 millones de dólares) al 31 de diciembre de 1981 (1,887 millones), la deuda externa creció en más de 850 millones de dólares, casi duplicando el monto concertado en los 16 años anteriores. Sólo en amortizaciones e intereses el país tuvo que pagar en el año 1981 la suma de 593 millones de dólares, equivalente al valor de la zafra azucarera de 1975.

Todo esto, lo han instrumentado sectores de la clase dominante a través del gobierno del PRD para independizar sus posibilidades de acumulación de los vaivenes de una economía de exportación de bienes primarios cuyos precios y cantidades a vender en el exterior no dependen de decisiones nacionales.

Desde el año 1978 el gobierno del PRD ha incrementado aceleradamente la participación del sector público en ese endeudamiento, con el propósito de solventar los déficits en la balanza de pagos provocados en gran dimensión por importaciones que no inciden en la producción y por los crecientes déficits del presupuesto.

EL GASTO PUBLICO

El gobierno del PRD introdujo, cambios muy significativos en la política del gasto público, a la vez que ha mostrado una mayor inclinación a ceder al sector privado actividades a cargo del gobierno.

De un alto gasto en inversiones públicas principalmente en construcciones (muchas de ellas cuestionables en cuanto a su prioridad, valor reproductivo y racionalidad) y de un constreñimiento del gasto corriente que ya se traducía en ineficiencias notables de los servicios públicos, puestos en práctica por el gobierno



5

de Balaguer, la administración perredeísta pasó a diseñar políticas presupuestarias que desbordaron la necesaria contratación de nuevo personal técnico y los necesarios aumentos salariales en niveles bajos y medios hasta conformar un presupuesto de gastos corrientes que se disparó a niveles astronómicos fundamentalmente destinado para sostener botellas, complacer clientelismo político y multiplicar innecesariamente los gastos operacionales e introducir en amplia escala la política de dilapidación, derroche de recursos y corrupción.

En este aspecto, el gobierno de Guzmán fungió como un administrador cada vez más alejado de las actividades productivas, aplicando una política presupuestaria que tendía a agravar las principales manifestaciones de la crisis económica y social en desarrollo.

Esa política no sólo redujo las posibilidades de expansión de la infraestructura económica sino que además acentuó el déficit de balanza de pagos, puesto que la expansión del medio circulante se dirigió hacia gastos en importaciones en un ambiente general de escasez de divisas y de estancamiento de la producción real interna.

La magnitud del gasto corriente en el curso de esa gestión perredeísta fue realmente extraordinaria: en el año 1977 el gobierno reformista gastó en ese capítulo presupuestario 382 millones y en el año 1981 el gobierno del PRD ya lo había elevado a 803 millones.

La reducción de los niveles de inversión pública real (a precios constantes) de 119 millones en 1977 a 69 millones en el año 1981 (a precios constantes) fue justificada con el supuesto de que la expansión del gasto corriente induciría a mayores niveles de inversión en el sector privado, reemplazando la reducción gubernamental.

En realidad el auge de la inversión privada en viviendas resultó efímero y no fue acompañado con el mismo dinamismo por la inversión reproductiva. Ese proceso se agotó en sólo un año debido a que el incremento del dinero en circulación no operó demandando sólo mayor producción nacional, como esperaban quienes concibieron esa política económica, sino con una creciente e incontrolable demanda de importaciones de todo género.

El exagerado incremento del gasto corriente condujo al déficit fiscal que en el año 1980, repuntó hasta los 190 millones de pesos y en el año 1982 sobrepasa ya los 300 millones.

Este déficit fiscal ha sido financiado con préstamos externos y con financiamientos inorgánicos, lo que aumenta las presiones inflacionarias y el déficit de balanza de pagos. Cifras del Boletín de la Embajada norteamericana en el país revelan que el financiamiento inorgánico alcanzó los 284 millones en el año 1981.

INDICADORES FINALES DE LA CRISIS

Si en esa. condiciones la inflación no llegó a los topes de otros países latinoamericanos en situaciones semejantes (aunque acumuló un 70% en 4 años) fue porque concurría la estrangulación en el sector externo





con el proceso de emisión dirigido a la inducción de demanda, el cual se lanzaba inútilmente en procura de importaciones para cuya satisfacción no aparecían más recursos.

Un cierto proceso involutivo se desarrolló, sin embargo.

Mientras centenares de millones de pesos se "desmonetizaban", o salían de la circulación paralizados primero en los bancos comerciales y luego en el Banco Central, demandando importaciones para las que no aparecían los suficientes dólares, el Estado dominicano emitía cantidades semejantes de dinero sin respaldo para fines de cobertura de sus gastos corrientes, haciendo figurar como inversiones, o gastos de capital, las subvenciones entregadas a las instituciones autónomas, particularmente a la Corporación Dominicana de Electricidad, como correctivos de sus déficits crónicos.

En esas condiciones, una parte considerable de la industria se ha visto sometida a cuotas de importacion, (que la mayoría de las veces no se aplican), se han agotado los stocks de materias primas y se han cancelado turnos de trabajo productivo, mientras la nómina de empleados improductivos en el Estado ha crecido en más de 69 mil personas.

Las reservas internacionales brutas descendieron de 328 millones en el año 1980 a 254 a mediados del año 1982, mientras en ese mismo período las reservas netas se redujeron de: —250 millones a—682 millones, según cifras del Boletín de la Embajada estadounidense.

Los compromisos de pagos vencidos a obligaciones en monedas extranjeras ascendieron en mayo del año 1982 a los 521 millones.

En el año 1980 el desempleo afecta al 28 por ciento de la población y el subempleo hasta el 50 por ciento, cifras superiores a las de años anteriores.

En materia de ingresos, el 50 por ciento de las familias urbanas reciben menos de 223 pesos mensuales, mientras el 10 por ciento reciben más de 700 pesos mensuales. En el campo, el 50 por ciento de las familias reciben menos de 130 pesos mensuales y el 10 por ciento más de 342. El 90 por ciento de las familias campesinas reciben menos de 342 pesos mensuales, expresión palpable de una pobreza generalizada.

Y a todo esto se le suma el deterioro progresivo de los servicios básicos de educación, salud, suministro de energía eléctrica y de agua potable.

CARACTERIZACION DE LA CRISIS Y DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO GUZMAN PARA CONTENERLA

En resumen, la crisis que afecta a la R.D. es una típica crisis de desequilibrio fundamental agudizada por la forma de acumulación de la burguesía dominicana y la aumentada política de presupuesto público con esos fines específicos.

Esta crisis se evidencia frente al fenómeno de acumulación de los grupos



ligados al capital bancario e importador: mientras hubo un financiamiento de las importaciones más o menos estable, debido al crecimiento de las exportaciones, el modelo económico no tuvo grandes contratiempos (nos referimos al funcionamiento de la economía y a sus funciones de acumulación por la burguesía), pero desde el mismo momento en que la tasa de crecimiento de las exportaciones atenuó su crecimiento, se pusieron en evidencia los elementos de esta crisis caracterizada por un déficit creciente, en el intercambio con el exterior.

No obstante, el modelo de funcionamiento y el de acumulación prosiguieron su expansión mediante el endeudamiento externo, algo de nueva inversión extranjera (sin alcanzar ésta los niveles del período 1970-1975) y el uso de reservas en pesos de que se disponía por los altos precios del azúcar (reservas que incluso se mantuvieron hasta el gobierno del PRD).

El medio circulante continuó creciendo aún cuando ya no podía mantenerse el mismo ritmo de financiamiento de la actividad económica mediante las exportaciones. A esto contribuyó la política del Banco Central, el cual actuó compensando con mayores volúmenes de préstamos al sector privado. Posteriormente esa política se dirigió también al sector público para financiar sus déficits.

Por tanto, siempre se mantuvo un exceso de dinero en el sistema, bajo control de los sectores de altos ingresos, incompatible con la capacidad para importar, sobretodo si se tiene en cuenta que la incapacidad de la estructura productiva de satisfacer la demanda de consumo e inversión determina presiones en favor de importaciones que han de pagarse con divisas.

Desde todo punto de vista, este exceso de pesos presionaba constantemente el alza del déficit de balanza de pagos que fue enfrentado con el endeudamiento externo.

En tal situación, desde el año 1981 se ha estado aplicando una política económica que provoca el estancamiento para tratar de restablecer el equilibrio externo. Para esos fines se ha recurrido, dada su estrecha relación, a estancar el crecimiento del producto para estancar el crecimiento de las importaciones.

Esa es una política "recomendada" por el Fondo Monetario Internacional.

Desde principios del año 1981, el medio circulante ha estado fuertemente regulado de manera que su crecimiento se ha hecho negativo en magnitud importante. La industria ha estado trabajando a un ritmo aproximado del 50% y se ha detenido la política de elevar el gasto corriente del sector público.

En este estado de cosas, cualquier función específica del sistema está obstaculizada por la escasez de divisas. Así, el presupuesto público, financiado tradicionalmente mediante los altos impuestos a las importaciones y al consumo, tiene hoy un déficit no sólo por el exceso de gastos sino también porque esos hechos han debilitado las recaudaciones; situación que ha sido aprobada por una nueva ley azucarera que reduce los impuestos a la exportación de azúcar.

La inversión se ve asimismo obstaculizada, puesto que por lo menos una tercera parte tiene que comprarse en divisas cada vez más caras y escasas. Las maquinarias e insumos de una industria altamente dependiente han sido encarecidos al traspasar la posibilidad de obtener dólares para financiarlas al mercado paralelo de divisas y dado que las fuentes de financiamiento barato para su compra no financian la prima del dólar en ese mercado.

Efectivamente, las crisis oficiales indican un descenso en la tasa de crecimiento del producto, en el ritmo de crecimiento de la inflación y también del déficit de balanza de pagos. Es claro que si algún efecto se logró en estos dos últimos aspectos es en base al estancamiento de la producción y a costa de una elevación del desempleo.

Las medidas propuestas o aplicadas por la anterior administración son típicamente monetarias o cambiarias, salvo las que han implicado prohibición de importaciones.

En este sentido, se han manejado la tasa de interés, el mercado de divisas propias y algunas medidas de incentivo con pocos resultados significativos; y también la contracción del crédito del Banco Central, el establecimiento de cuotas de importación para las materias primas industriales, el encarecimiento de importaciones con actos indirectos (como lo es dejar de pagar al exterior los dólares de cartas de crédito) que han tenido limitados efectos en el logro de los propósitos trazados.

El resultado final es que estamos frente a un fenómeno de estancamiento o reducción del nivel de actividad económica, sin que las tasas de inflación se hayan reducido sustancialmente; acompañado como era de esperarse de elevadas tasas de desempleo, principalmente urbano, con fuertes dificultades de que la función ahorro-inversión del sistema se realice cabalmente.

Asimismo, los efectos de la drástica reducción de la inversión pública, que aún cuando en valor absoluto puede compensarse con el incremento de los gastos corrientes y en materia de empleo compensarse parcialmente a través de la hipertrofia burocrática, en general han agudizado el desempleo, concentrando la distribución del gasto, e inducido en mayor escala el consumo hacia los productos importados.

Las funciones típicas del capital no se están verificando en forma normal. El mercado se ha ido estrechando paulatinamente, dado que para tratar de lograr el equilibrio externo se ha ido frenando el crecimiento económico.

Esta situación ha conllevado fuertes enfrentamientos entre los grupos de poder por la hegemonía económica, así como a un proceso acelerado de concentraciones y fusiones de capitales que se ha iniciado con la participación de capitales nacionales y extranjeros, y los hechos tienen que ver con que ganando el mismo partido de gobierno las elecciones, el forcejeo haya sido como fue.



III NUEVOS FACTORES POLITICOS

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ganó las elecciones por un margen de 185,692 votos sobre su principal contrincante el Partido Reformista.

Con esa votación, el PRD, además del Poder Ejecutivo, confirmó su control sobre la Cámara de Diputados y conquistó la mayoría absoluta en el Senado (Poder Legislativo), con toda la posibilidad de conformar una judicatura bajo su influencia (Poder Judicial).

En cuanto al gobierno central, el nuevo equipo perredeísta se ha comprometido, a través de formulaciones programáticas, a garantizarse un control mayoritario del gabinete y la administración pública, a ejercer sus funciones mediante "consultas y acuerdos" entre Poder Ejecutivo y partido y a gobernar con un "pie en el Palacio Nacional y otro en la Casa Nacional del PRD".

En tales circunstancias, y ante esos definidos compromisos serán mucho más difíciles de emplear los argumentos del control "a medias" del poder y de la "separación partido-gobierno", que tan buenos resultados rindieron a la alta dirección del PRD durante su primer período de gestión.

Ahora se trata de un gobierno que proclama anticipadamente su carácter de gobierno-partido, de un partido que contará con una indiscutible mayoría en el seno de los demás poderes del Estado, pero que seguirá expuesto a luchas de "tendencias", que a su vez podrían dar lugar a alianzas y compromisos de algunas de sua facciones (en detrimento de otras) con los otros partidos opositores que comparten las Cámaras Legislativas y los Ayuntamientos.

Las elecciones pasadas reproducen en gran medida el bipartidismo PRD-PR, con un espacio limitado para la representación congresional y municipal de un PLD cada vez más integrado al sistema y en vías de convertirse en su socio menor, dispuesto a un juego político esencialmente reformista.

En tales circunstancias, si bien la mayoría parlamentaria perredeísta —salvo en algunos ayuntamientos— no puede ser modificada exclusivamente mediante las alianzas circunstanciales entre el PR y el PLD, si puede ser alterada por disidencias

fraccionales del PRD sumadas al PR y al PLD, las cuales podrían darse en torno a una tónica predominantemente antigubernamental, en la que se mezclen el derechismo con la demagogia populista, las presiones seudoizquierdistas y actitudes progresistas.

El cuadro de las tendencias existentes en el PRD durante los pasados cuatro años—guzmancismo, jorgeblanquismo y majlutismo— parece modificarse significativamente.

La muerte del ex-presidente prácticamente liquida su tendencia o, más bien, sus miembros son absorbidos o se ubican por /en otros sectores; el actual presidente con su decisión de prohibir la reelección reduce sus posibilidades de liderear un bando y con esa misma disposición y con sus acercamientos a la oposición balaguer-boschiana, pretende situarse, ese es su esfuerzo inmediato, no solo por encima de las querellas intra-PRD, sino de las que puedan darse entre las organizaciones institucionalmente integradas al sistema; estos dos hechos ponen a pensar en que el presidente del Senado aparentemente tiene el agrupamiento más grande y mejor organizado, indicando sus 40 días de gobierno que su decisión es mantenerlo y fortalecerlo.

A José Francisco Peña Gómez no puede considerársele dentro de los nuevos factores políticos, pues sigue siendo el mismo árbitro armonizador de las tendencias en el seno del PRD.

Todos estos señalamientos son estrictamente coyunturales, expuestos a variar en cualquier momento. Lo que sí es posible afirmar sin dudas es que las tendencias seguirán existiendo en el PRD, pero no así quiénes serán sus líderes, cómo se desarrollarán y cuáles serán sus características o posiciones a mantener.

Por todo el poder político que acumula el PRD, no es extraño que a su sombra operen las distintas tendencias de la propia burguesía dominicana, y que no solo sea este partido la expresión de una de esas tendencias de la clase.

Avanzada Electoral era una verdadera alternativa propia para alguno de esos agrupamientos clasistas en caso de que sus expresiones propias no se pudiesen hacer por vía de Balaguer; o, de otra manera, que lo expresado por Jorge Blanco encontrara un valladar en su propio agrupamiento.

Si bien se ha proclamado la disolución de la Avanzada, en la distribución ministerial del poder hay las expresiones de tendencias y ambiciones, verdaderos polos de poder y concepción que no tardarán en enfrentarse de alguna manera.

En un plano, la rivalidad política Hatuey Decamps Vs. José Ovalle (dirimida en favor del primero); en otro, la polarización evidente en la ejecución de política que se expresa entre el propio Decamps y el Dr. Bernardo Vega, cada uno con aspiraciones, poder e intereses muy específicos.

Las iniciales medidas económicas tomadas por el nuevo gobierno, donde se mira de nuevo hacia el esquema balaguerista de 1966, es prueba concluyente que el desplazamiento de la tendencia guzmancista no constituye solo rivalidad personal, sino choque de actitudes y de métodos para ser más eficiente en favor de la clasc.



IV SIGNIFICADO DEL PROGRAMA DE CONCENTRACION NACIONAL DEL GOBIERNO DE JORGE BLANCO

Dentro de ese contexto político-económico, el equipo de Jorge Blanco, actuando a nombre del PRD, prometió aplicar su Programa de Concentración Nacional.

- —Un programa de gobierno definidamente ubicado dentro del interés de preservar y reproducir el sistema vigente, tratando de imprimir un mayor grado de eficiencia y racionalidad al Estado capitalista y la propiedad privada mediante el empleo de algunas directrices de las escuelas econômicas de CEPAL y de Keynes, junto a algunos elementos de la política socialdemócrata y priísta en lo relativo a resdistribución de ingreso, relaciones de conciliación interclasista y modelo político.
- —Un programa que en materia de reformas no toca las estructuras, aunque por necesidad de legitimación electoral prometió metas y ofreció reivindicaciones que para llevarse a cabo tendrán que hacerse cambios estructurales no contemplados.
- —Un programa que en lo relativo a las reformas y variación de política económica dentro del sistema se limita a la reforma tributaria, a indefinidas modificaciones en las condiciones contractuales con los consorcios extranjeros, a cambios presupuestarios y a nuevas líneas de inversión pública que tenderían a dar más relevancia al Estado y a su sector económico CEA-CORDE, a regulaciones en el empleo de las divisas, a la reactivación del sector de la construcción, a un control sobre las importaciones, a indefinidas revisiones en la legislación vigente, a las reformas administrativas, a continuar los esfuerzos de modernización de la agricultura por vía de amplios programas de fomento que colocan a la reforma agraria en un segundo plano y a un conjunto de disposiciones dirigidas a dar una mayor racionalidad a la economía.
- —Un programa que mantiene e introduce directrices destinadas a favorecer la expansión del gran capital criollo y extranjero en diversas vertientes de la economía.
- —Un programa que si bien aparentemente desfavorece a sectores de la burguesía importadora, privilegia al sector exportador controlado por el capital privado, particularmente extranjero.

—Que preserva el statu del latifundio privado criollo y extranjero y del parasitario gran colonato azucarero.

—Que por un lado favorece las inversiones privadas en industrias que emplean materia prima nacional y proclama prioridad a la pequeña y mediana empresa, y por otro favorece financiamientos y promete estímulos que reproducirán y ampliarán con ligeras modificaciones la concentración de la propiedad en favor de la burguesía dependiente y del capital imperialista.

A todo esto hay que agregar que además de los sectores del bloque social dominante que han podido inspirar ese programa, sobre la nueva administración actúan, influyen, presionan, desde dentro y desde fuera, otros sectores que tienden a anular algunas de las vertientes reformistas y de las iniciativas ligeramente positivas que introduciría la aplicación de ese programa de gobierno en la vida económica y política del país.

Así, es posible que se presenten diferencias más o menos significativas entre el programa prometido antes de constituir el gobierno y las orientaciones y decisiones específicas de la administración de Jorge Blanco en materia de política económica, como ya se expresaron en su discurso de toma de posesión.

En uno y otro sentido operan también las diversas fracciones del poder imperialista norteamericano y del poder imperialista mundial; incluida la socialdemocracia alemana, cuya presencia y actividad en el país se ha incrementado en los últimos años.

PUNTOS QUE ENCONTRARAN NUESTRA OPOSICION FRONTAL

Al examinar las medidas específicas contempladas en el programa nos encontramos con formulaciones ambiguas, indefiniciones y propósitos que encontrarán nuestra más firme oposición, a saber:

—Al señalarse que los recursos de la banca exterior se "pondrán al servicio de la producción nacional" se deja abierta la posibilidad de que el sector privado, criollo y extranjero, se siga aprovechando de la capacidad de endeudamiento del país.

—La imprecisión sobre quienes podrían ser los beneficiarios de las nuevas explotaciones mineras y forestales y de la industrialización de la piedra caliza deja abierta la posibilidad de la cuestionada presencia de la empresa privada criolla y extranjera en esos sectores. —El compromiso de "no ignorar realidades derivadas de la situación jurídica EXISTENTE" en materia de revisión de los contratos con empresas tiende a fortalecer la posición de la parte extranjera en las posibles negociaciones para obtener mayores beneficios para el país.

—La limitación de la captación de tierras para el IAD a las tierras baldías y a las tierras del Estado y de cuota parte está destinada a preservar la gran propiedad latifundista privada sobre las tierras en producción, ignorar las limitadas leyes agrarias vigentes y a imponer una de las concepciones más conservadoras en lo que a reforma agraria se refiere.

- —La disposición de "estimular la zona franca" equivale a propiciar en mayor escala la explotación infrahumana del trabajo asalariado dominicano y el aprovechamiento por el capital extranjero con fines de lucro desmedido del desempleo y el subempleo masivo existente en el país.
- —La intención de permitir "la reinversión de las utilidades" de las empresas extranjeras en "igual" forma que a las empresas nacionales, estimularía una mayor expansión y control de la economía nacional por el capital extranjero en detrimento de nuestra aspiración a la soberanía económica.
- —Similares resultados conlleva el proclamado estímulo a la asociación del capital extranjero con el nacional y la constitución de las llamadas empresas mixtas.
- —Un mayor "estímulo" a las compañías privadas de seguro iría en detrimento del necesario control estatal y

social sobre ese renglón de servicio.

- —El criterio que estima "Inevitable" la inflación tiende a debilitar los esfuerzos destinados a contrarrestarla.
- —El condicionamiento de la política salarial a la productividad de las empresas se presta a un permanente escamoteo patronal de las más justas aspiraciones obreras.
- —El calificativo de "óptimo" al falso e ilusorio apoliticismo de las Fuerzas Armadas y las pretensiones de reforzar su papel de árbitro de la vida nacional ubicándolas "por encima de las opciones políticas" contradice incluso otras formulaciones programáticas sobre el tema que interpretan el apoliticismo de los cuerpos castrenses como "apartidismo" y que reconocen la necesidad de su "participación en los graves problemas económico-sociales, sobre todo en los que afectan a las masas desposeídas".

Tales formulaciones contarán con nuestro rechazo y debe darse por seguro el esfuerzo de nuestro partido para impedir la aplicación de esos puntos del Programa de Concentración Nacional.

Puntos que sirven a la Lucha Inmediata, Por las Reformas

Por el contrario como en términos de lucha inmediata ese programa abarca otros puntos indudablemente positivos nuestro partido propugnará abiertamente, respaldará los esfuerzos, promoverá los movimientos de presión social necesarios y desarrollará una amplia política de unidad de acción por su cumplimiento.

Los propósitos contenidos en dicho programa que recibirían el estímulo y serán objeto de lucha para su aplicación son los siguientes:

*Inversión presupuestal hacia áreas reproductivas.

*Evitar la creación de empleos improductivos. *Cuotas de sacrificio a los grupos más altos, limitación del desperdicio, controles y prohibiciones directas de importaciones. *Utilización del crédito externo sólo para obras prioritarias.

*Enfasis en impuestos progresivos directos e internos y política tributaria que evite dependencia del comercio exterior.

*Revisión de contratos entre el Estado dominicano y empresas multinacionales en interés de obtener acuerdos más beneficiosos para el país.

*Incorporar anualmente de 8 a 10 mil familias campesinas a los planes de asentamientos del IAD.

*Recuperación de las tierras del Estado y las tierras de cuota-parte.

*Creación del sector forestal.

*Asentamientos agroforestales.

*Política de utilización racional del suelo.

*Creación de 80 mil nuevos empleos cada año.

*Construcción de las presas de Alto de Yuna, Juguy, Aguacate, Los Meras, La Cabirma y Los Toros. Continuación de los proyectos hidroeléctricos de Sabana Yegua, Rincón, Hatillo y Sabaneta.

*Aprovechamiento de las aguas subterráneas.

*Saneamiento de la CDE. Recuperación de sus líneas de transmisión. Reducción de los costos de producción. Conversión de las plantas termoeléctricas que operan con petróleo al uso del carbón mineral. Aprovechamiento de los hidroenergéticos mediante la construcción de grandes, medianas y pequeñas presas. Promoción de la investigación en energética y de la búsqueda de otras fuentes de energía. Creación de las "fincas de energía". Revisión de las tarifas para proteger al pueblo consumidor.

*Elaboración de un nuevo código

minero destinado a proteger el interés nacional. Intensificar la exploración y proyección minera. Reforzar la perforación y exploración petroleras. Explotación de los yacimientos de Yoyo, Las Cañitas, Mata Grande, Los Cacaos siempre que sea a beneficio del Estado dominicano.

*Dinamizar y ampliar CORDE para que contribuya a la industrialización del país.

*Defensa de CORDE, CDE Y CEA como patrimonio nacional.

*Propiciar a través del CEA una política de diversificación de la industria de la caña de azúcar. Lograr una mayor eficiencia administrativa del CEA. Dotar a los bateyes de servicios básicos (agua, energía eléctrica, salud y educación). Dominicanización de la zafra azucarera y establecimiento de salarios más justos y mejores condiciones de vida para los trabajadores azucareros.

*Participación en COMUNBANA, GE-PLACEA, SELA, CARICON y NA-MUCAR.

*Rescate de la industria hotelera de! Estado.

*Reglamentar los seguros privados.

*Construcción de 25 mil viviendas anuales destinadas a los sectores de bajos ingresos. Inversión pública de 1,200 millones de pesos en los cuatro años de gestión y generación cada año por esa vía de 60 mil empleos directos y 40 mil indirectos. Rehabilitación de 200 Kms. y mantenimiento de 5 mil Kms. de carretera cada año. Rehabilitación de 300 Kms. y mantenimiento de 5 mil Kms. de caminos vecinales cada año.

*Promoción de industrias artesanales. Creación de centros deorfebreríay artesanja.

*Enfasis en la produccion de algodón

y de empresas agroindustriales de esencia de pechule, bija, henequén, higuereta, sisal y sávila en la región fronteriza.

*Plan masivo de reforestación.

*Incentivar industrias textiles y de la aguja.

*Controlar precios de medicamentos. Incentivar la producción farmacéutica. Ampliar los servicios de salud. Suministrar medicamentos libres de costo a los pacientes de hospitales públicos. Ampliar los programas de salud. Suministrar un vaso de leche diario a todos los estudiantes primarios y secundarios.

*Ley de seguridad social que cubra a todos los trabajadores.

*Recuperación de las instalaciones deportivas. Rehabilitar y construir escuelas de educación física. Creación de campamentos de recreo y nuevos centros de entrenamiento. Contratación de ayuda técnica para el deporte.

*Implantación de la enseñanza obligatoria desde 6 años para toda la poblacion. Programas masivos de educación pre-escolar. Creación de centros de formación técnico-vocacionales para obreros y campesinos. Instalación de Casas de la Cultura por provincias y municipios.

*Garantía al derecho de organización sindical. Relación más justa entre salario y costo de la vida. Mejorar las condiciones de higiene y seguridad laboral. Otorgar statu. fijo a los azucareros con más de quince zafras. Clasificación de puestos públicos y disminución de diferencias salariales entre los puestos altos y bajos.

*Revisión de los contratos bilaterales.

*Reforma del sistema penitenciario, Autonomía administrativa de la Suprema Corte, Garantías constitucionales

*Política abierta de colaboración amistosa con todos los países del mundo.

*Participación de los militares en la solución de los graves problemas socioeconómicos que afectan a las masas deposeídas.

*Preservación del patrimonio público y combate a la corrupción administrativa y el tráfico de influencia.

PROGRAMA VS. REALIDAD

Una cosa es el conjunto de ofertas y propósitos enunciados y otra las reales posibilidades de llevarlas a cabo, si se compara el limitado alcancede las medidas contempladas con el ambicioso conjunto de promesas y planes, y con la limitación de recursos disponibles dentro del marco del nuevo gobierno y de la política económica que él anuncia, o de las que proponen los grupos de poder económico que influyen sobre el y condicionarían su trayectoria.

Las dos principales tendencias en materia de política económica burguesa aplicadas a nuestro país en los últimos años —la que se puso en práctica durante el régimen balaguerista y la que le sustituyó a partir del ascenso de la primera administración perredeísta— evidenciaron, cada una en su momento y ambas apoyadas en el mismo modelo y en el mismo sistema, que no representan soluciones



a los graves problemas existentes y que ni siquiera pueden contener su progresiva agudización.

De más en más se evidencia que la crisis es una crisis del capitalismo sometido, que toma las crisis externas para sí, y que no puede beneficiarse en su desarrollo de los auges externos; una crisis de estructuras productivas condicionadas y deformadas; de estructuras de tenencia de la tierra que marginan a las mavorías campesinas y sostienen el atraso; de estructuras en la industria, el comercio, las finanzas y los servicios bajo control de grupos capitalistas nativos y del gran capital extraniero.

La economía dominicana, azucarera y minera, se ha estructurado para suplir las necesidades del capitalismo monopolista extranjero suministrándole materias primas y productos semielaborados a precios promedios muy por debajo del aporte en trabajo de los dominicanos.

A través de las inversiones directas y de los préstamos, el capital extraniero transfiere hacia sus países de origen una parte importante de nuestros excedentes.

El aparato productivo interno se limita a suplir una demanda reducida para ofrecer en bandeja de plata una gran parte de la demanda a las importaciones que generan déficits y que a su vez se traducen en endeudamiento.

El mecanismo mediante el cual se ha desenvuelto este proceso es la despiadada extracción de excedentes a las clases trabajadoras.

Ese patrón de acumulación ha conformado una estructura productiva cuyo funcionamiento y naturaleza ha sido incapaz de dar respuesta o satisfacer de manera creciente las necesidades de las grandes mayorías nacionales.

La explotación capitalista en la República Dominicana ha beneficiado siempre v de manera exclusiva a los grupos del bloque social de dominación y ellos y sólo ellos son los responsables de la crisis que padece el país.

El hecho de que el eje de la acumulación descanse en las actividades agroexportadoras implica, por un lado, que el nivel de actividad interno dependa de factores externos no controlables por el país; pero que además el capital extranjero ejerce verdaderas funciones de dominación y control sobre todo el proceso económico, siendo uno de los principales apropiadores de las riquezas socialmente creadas.

Sin lugar a dudas, el mantenimiento de este fenómneo ha determinado una profundización de la vulnerabilidad y dependencia dominicanos: pues, por un lado, de manera creciente se explotan recursos internos para satisfacer necesidades ajenas, compitiendo incluso con actividades orientadas al mercado nacional y, por el otro, se depende cada vez más de aprovisionamiento del exterior para poder mantener las actividades internas.

Si a este fenómeno agregamos el hecho de la inadecuada utilización del excedente que queda en el país, tanto en términos de su consumo productivo como improductivo, se tienen los elementos principales para caracterizar la naturaleza de



la crisis que hoy se enfrenta, que el programa del Gobierno de Concentración Nacional enuncia en algunos de sus aspectos, pero que no enfrenta en soluciones sino en remedios.

En un nuevo equipo de poder se mueven contradictoriamente grupos sociales que sustentan nuevas variantes de las dos políticas económicas evidentemente fracasadas, que aplicaron sucesivamente Balaguer y Guzmán con su campo cívico.

Una, la neobalaguerista, se expresa en aspectos del Programa de Concentración Nacional; y la otra, sustentada por los llamados grupos de la burguesía "cívica", trilla con más fuerza el camino de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, estando presentes ambas concepciones en aspectos del discurso de toma de posesión del nuevo presidente. Las dos corrientes tienden a una cierta transacción y coincidencia que preparan las cóndiciones para la intervención del Fondo.

Ambas corrientes y sus respectivos sustentadores sociales están presentes también en el interior del Partido Reformista dando lugar a un complejo juego de presiones en uno y otro sentido.

Ambas, y esto es lo más importante, al evadir por su esencia de clase los necesarios cambios estructurales en medio de una coyuntura externa tan desfavorable, están incapacitadas no sólo para solucionar, sino incluso para contener la tendencia general hacia la agudización de la crisis. Esta es una realidad confirmada por la vida, por la experiencia en cuanto a gestión económica gubernamental se refiere.

Las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana, calculadas las potencialidades de la aplicación de las reformas tributarias y las medidas racionalizadoras que plantea el Programa del Gobierno de Concentración Nacional, están muy por debajo de llenar las demandas a cumplir en los planes de viviendas, de asentamientos campesinos, de expansión de la política educativa y cultural, de creación de infraestructuras de mayoría en el sistema de salud y en los programas nutricionales y de elevación del nivel de vida de los trabajadores allí contemplados.

PERSPECTIVAS ECONOMICAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

La severa crisis que afecta la economía dominicana en los últimos años pone de manifiesto el deterioro del aparato productivo nacional y paralelamente la agravación de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Hasta el momento no se vislumbran cambios significativos en los factores externos e internos que puedan incidir eficazmente para revertir esta situación. Incluso para los organismos oficiales que tienen que ver con el desenvolvimiento de la economía, las perspectivas a corto y mediano plazo se presentan con grandes incertidumbres y en el mejor de los casos no parece posible superar los factores de estancamiento con inflación que vienen caracterizando el proceso económico de los últimos años.



Por su parte, las orientaciones de política económica introducidas por el nuevo gobierno podrán modificar algunos comportamientos, pero en lo esencial ellas no tocan los problemas centrales del aparato productivo interno y por lo tanto es difícil prever una ampliación significativa de la capacidad financiera del Estado como para asegurar una mejoría sustancial de las condiciones de vida y el cabal cumplimiento de muchas de las promesas formuladas en el Programa de Concentración Nacional.

La coyuntura internacional

A pesar de una relativa estabilización de los precios del petróleo no se prevé una reducción importante en la tasa de inflación de la economía mundial y particularmente de la economía norteamericana. La tasa de inflación mundial para los próximos años se espera que sea alrededor del 10% anual, y este nivel afecta significativamente la economía nacional por su alta dependencia de bienes importados y de servicio procedentes del exterior.

- No se prevén aumentos significativos en los volúmenes de los principales productos de exportación del país, y las recientes medidas anunciadas no tocan los problemas centrales de una posible expansión sostenida de la oferta exportable.
- —Paralelamente, el comportamiento de los precios de esos principales productos, en especial el azúcar, indica una tendencia a la baja o a lo sumo a una muy leve lenta mejoría y en aquellos rengiones que no determinan el valor global de las exportaciones. La tasa de crecimiento global esperada pra el período 82-84 es de 2,84% en valores corrientes.
- Las importaciones de bienes pueden reducirse en una cierta magnitud debido a la reducción del nivel de actividad interno que viene caracterizando la economía dominicana en los últimos dos años, que las medidas propuestas por el nuevo gobierno no modificarán sustancialmente; además, por los efectos de las prohibiciones anunciadas recientemente. De todas formas, el monto total de importaciones de bienes y servicios seguirá estando muy por encima del nivel de las exportaciones, por lo que será prácticamente imposible revertir la situación deficitaria de la balanza comercial.
- Otro elemento de particular importancia que gravitará sobre el desenvolvimiento económico dominicano, a corto y mediano plazo, lo constituye la enorme presión que representan las amortizaciones de la deuda externa y la repatriación de utilidades y pagos de intereses. Para el próximo trienio ONAPLAN estima que sólo en intereses de la deuda y repatriación de beneficios la salida de divisas ascendería a unos 1,200 millones de dólares (esto no incluye amortizaciones).

Nivel de actividad interna prevista

 Si bien es cierto que una modificación de la actual política de precios agrícolas a nivel de productos puede incidir favorablemente



en el aumento de la producción agropecuaria, no menos cierto es que existen pocas posibilidades de un crecimiento sostenido, pues no se vislumbran acciones concretas que actúen sobre los factores de rigidez del sector a mediano plazo. Esto implicaría un deterioro más significativo de los niveles de producción per cápita.

- En cuanto a la producción de cerne, cualquier aumento que pueda registrarse está estrechamente vinculado a la liberalización de las exportaciones en este régimen. Esto implicará necesariamente un fuerte deterioro de la ingestión de proteínas a nivel nacional.
- Para el sector industrial las previsiones no son más favorables. Posterior al discurso presidencial se incorporan formulaciones de políticas que indirectamente activarían la producción manufacturera y muy especialmente la orientada hacia la exportación, pero al mismo tiempo en el marco de una economía estancada estas políticas podrían no tener los efectos esperados. En todo caso, la problemática de la industria azucarera y una eficaz reorientación y fortalecimiento del aparato industrial del Estado requerirán acciones de mayor alcance y de más largo plazo.
- El panorama de la minería no puede ser peor y cualquier modificación en este campo está por el momento al margen de las decisiones internas. Sin que se plantee hasta ahora modificaciones contractuales que las hagan diferentes.
- Es muy probable que en el corto y mediano plazo se verifique una cierta recuperación de la construcción, pero su participación relativa en la producción nacional no compensaría la reducción o estancamiento en el resto de las actividades productivas. Este repunte se podría vincular a una cierta mejoría en la situación del empleo, sin que esto de por sí signifique alcanzar los 80,000 nuevos empleos anuales prometidos en el programa de concentración nacional.

Perspectivas fiscales

En este campo las nuevas medidas introducen algunos cambios y ellas se orientan a un aumento de los ingresos presupuestarios, una modificación en la composición del gasto, dando preminencia al gasto de inversión en infraestructura y reduciendo el componente de gasto corriente.

Esto permitirá, sin duda, reducir el nivel del déficit presupuestario sin lograr suprimirlo, pero parece imposible cumplir las promesas contenidas en el programa de gobierno en relación a la ampliación y mejoramiento de la cobertura de los servicios sociales básicos y de infraestructura económica.



V-OPOSICION, ESTRATEGIA Y TACTICA

Esta caracterización del Programa de Concentración Nacional y la valorización crítica de sus aspectos más importantes, de las fuerzas sociales dominantes que podrían impulsarlos u obstaculizarlos y de sus perspectivas en materia de aplicación, no reducen la importancia de la evaluación y de la definición de actitudes respecto a sus detalles en todo lo referente a las ofertas y disposiciones concretas que contiene.

Este aspecto debe incorporarse a la formulación de una política de oposición que vincule con toda la flexibilidad que requiere la lucha por las reformas y las reivindicaciones inmediatas con la lucha por la revolución antiimperialista y socialista; esto es, la estrecha vinculación de la estrategia socialista con una táctica que emplace al nuevo régimen con sus propias palabras y promesas; que tome esas y otras demandas de corte reformador y reivindicativo como mecanismo impulsador de la lucha de clases, y creador de un movimiento de presión social y política, que al compás del avance de las ideas y de las organizaciones revolucionarias desborde esos objetivos limitados y conforme una nueva opción de poder promotora de los cambios hacia el socialismo.

Estrategia socialista

La política de oposición a este nuevo gobierno se apoyará en nuestra estrategia y en consecuencia partirá de uma decidida impugnación a todo el sistema vigente, a sus diferentes opciones políticas y su nueva variante gubernamental.

Luchamos por la transformación revolucionaria de esta sociedad en crisis, por la implantación de nuevas estructuras económicas y sociales y nuevas instituciones políticas. Luchamos por el establecimiento del socialismo.

El programa enarbolado por el PRD, aun en el caso de ser aplicado a plenitud, no contempla las soluciones que demandan los problemas que genera la crisis estructural del capitalismo dominicano. Ni siquiera representa un conjunto de reformas sociales audaces dentro del sistema, definidamente socialdemócrata—de lo cual dista mucho el Programa de Concentración Nacional.

El desempleo y el subempleo masivo, la inflación progresiva, la concentración de la propiedad y las riquezas en pocas manos, la existencia de una estructura agraria latifundista que frena la producción y provoca la miseria campesina, la explotación del trabajo asalariado y la pobreza que afecta a más de la mitad de la población, la dependencia comercial, el atraso en todos los órdenes, el endeudamiento externo altamente oneroso y mal empleado, el control de rengiones claves de la economía por el capital extranjero, el deterioro de los servicios básicos... no pueden ser superados bajo el predominio de la gran propiedad privada y de la dominación imperialista.

Ellos, por su gravedad y complejidades, sólo podrian solucionarse aplicando el programa de transformaciones socialistas que sustentamos, esencialmente diferente al programa del PRD y al de los demás partidos del sistema.

Los aspectos más importantes de ese programa evidencian su esencia transformadora y muestran la importancia que revisten para hacer una oposición genuinamente revolucionaria:

—La confiscación en favor del Estado, para su conversión en propiedad
social, de las grandes empresas capitalistas criolias y extranjeras (grandes industrias, bancos, compañía de teléfonos
y comunicaciones, compañías de transporte) permitirá captar enormes sumas
de dólares y de pesos que boy son sacados hacia el exterior o que son empleados para mantener la vida de lujo y
derroche de una rainoxía.

La expropiación de los latifundios y el establecimiento de un tope máximo de 800 tareas a la propiedad agraria privada, permitirian destinar a la reforma agraria alrededor de 18 a 20 millones de tareas que a su vez posibilitarían dar trabajo y medio de vida a unas 350 mil familias pobres del campo y la ciudad, contribuyendo en gran escala a la solución del problema del desempleo y el subempleo, e incorporando a la producción recursos humanos absurdamente marginados.

Y para completar una intensa y rápida ofensiva contra el desempleo a los planes de reforma agraria sólo habría que sumar la técnica de la rotación de cultivo, la utilización de la capacidad industrial ociosa (que en nuestro país es del orden de un 50 por ciento en el 83 por ciento del área productiva), las inversiones en obras hidráulicas y en especial en canales de riego que posibilitan emplear 400 hombres por cada millón invertido, la explotación del gran potencial minero y el desarrollo de industrias como las textiles, confecciones, calzados, conservas, vidrio, alimenticias, que al misme tiempo gazantice el desarrollo de un socialismo sin restricciones en el consumo en nuestro país.

Entendemos por perfectamente posible la ejecución de una política de industrialización que tome como ejes centrales el desarrollo de CORDE y del CEA, que una vez saneados, rehabilitadas sus empresas y ampliadas sus áreas de competencia con la incorporación de las empresas nacionalizadas o expropiadas, pueden expandirse y diversificarse.

CORDE estaría así en condiciones adecuadas para reproducirse a partir de sus propios recursos. Y el CEA y el país podrían evitar los vaivenes e inseguridades del mercado azucarero a través de una política de comercio exterior más abierta y diversificada que posibilite gestionar un acuerdo de ventas a largo plazo, con un precio mínimo que nunca

sea inferior al costo de producción y que oscile hacia arriba en función de los niveles que por encima del mismo se registren en el mercado mundial.

—El establecimiento de relaciones con todos los países del mundo, incluidos los países socialistas, se constituiría en un importante paso para lograr nuevos mercados para nuestras exportaciones e intercambios comerciales, técnicos, científicos y culturales más ventajosos que los actuales.

—Un serio esfuerzo por sustituir importaciones de alimentos y de materias primas procedentes de la tierra, fáciles de producir en nuestro país, permitiría economizar en un plazo de 5 años unos 250 millones de dólares, de los 450 millones que hoy se gastan anualmente por concepto de importaciones de productos de la tierra.

-El proceso de desarrollo económico se apoyaría en la aplicación de un plan energético global, que partiendo de la reducción de los abultados gastos administrativos de la CDE y de la progresiva eliminación del desperdicio por concepto del deterioro de las líneas de transmisión, estaría fundamentalmente basado en la reducción de la dependencia del petróleo importado mediante los esfuerzos nacionales de exploración de hidrocarburos y del aprovechamiento de la energía hidráulica, del carbón mineral,. de la energía solar y de otras fuentes energéticas. ¡Sesenta sitios se han localizado para la instalación de presas capaces de generar un 35% del consumo actual de energía y nada explica que al desarrolo de ese gran proyecto no se le haya dado prioridad!

—La renegociación de la deuda externa y la puesta en práctica de normas e iniciativas que permitan diversificar las fuentes de financiamiento, emplear exclusivamente esos recursos en obras reproductivas y liberar al país de las ataduras y los intereses usurarios que imponen ciertas instituciones y la banca internacional privada, son pasos necesarios y factibles.

—Y a partir de todas esas determinaciones, sería posible convertir en realidad: la asistencia médica gratuita en toda la extensión de la palabra (consultas, servicios, hospitalización, medicinas, descanso).

La educación gratuita (guarderías, libros, útiles escolares y enseñanza a todos los niveles).

La garantía de un techo adecuado que no represente un costo superior al cinco por ciento del salario recibido.

La cobertura total del servicio de agua potable.

La preservación de la higiene pública y del medio ambiente.

La vigencia de la libertad de creación artística y el desarrollo de una democracia socialista que posibilite la participación y el control de las masas en la gestión y dirección de las nuevas instituciones.

Todo esto y otras cosas más puede dar el socialismo por el cual luchamos.

Táctica opositora

A partir de la lucha por ese proyecto de una nueva sociedad debe definirse la acción opositora del PCD, de las organizaciones que integramos la UNIDAD SOCIALISTA y de toda la izquierda marxista del país, vinculándola al combate por objetivos menores, por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores y de todos los oprimidos, por las reformas sociales y económicas, por la ampliación de la democracia y por demandas nacionales de alcances diversos.

En las condiciones actuales de nuestro país y en el marco de un gobierno como el de Jorge Blanco, el avance hacia el socialismo requiere de una táctica que incluya esas tareas menores y presione desde abajo por el cumplimiento de las ofertas, leyes, proyectos de leyes y declaraciones de intenciones de las autoridades nacionales y municipales, que aun dentro de los marcos del capitalismo tienden a satisfacer aspiraciones populares y nacionales mínimas.

En estas circonstancias, la lucha por la expansión de la conciencia socialista revolucionaria no puede contraponerse ni marginarse de los esfuerzos por lograr avances limitados, reivindicaciones concretas, planes de modernización, normas de racionalización y reformas sociales o legislativas más o menos importantes.

Desde un punto de vista revolucionario esa lucha y esos esfuerzos se complementan, sobre todo si el combate por las reformas es entendido como medio para lograr las aspiraciones a un mayor bienestar de las masas, como recurso para desarrollar las confrontaciones sociales de los explotados con una clase dominante generalmente resistente a esas reivindicaciones y reformas, como medio adecuado para comprobar las propias limitaciones de los cambios dentro del sistema y recurso para mostrar las inconsecuencias de las opciones burguesas respecto a sus propios programas y promesas de corte reformista; todo esto en interés de crear el grado de conciencia política y las condiciones que posibiliten la revolución social y la emancipación nacional de nuestro pueblo.

Y hoy nos encontramos frente a una opción de gobierno concreta, con ofertas y promesas concretas, imposibles de soslayar dentro de este esfuerzo destinado a vincular nuestra estrategia a una áctica política actualizada.

En ese orden de ideas, es preciso tener en cuenta que por las promesas detalladas en la parte dispositiva del llamado Programa de Concentración Nacional del PRD y por las nuevas esperanzas generadas por la candidatura del Dr. Jorge Blanco votaron centenares de miles de personas hasta el punto de garantizarle la victoria y el consiguiente ejercicio gubernamental.

Esas promesas entrañan un compromiso de la dirección del PRD y del nuevo equipo gobernante que exigen de importantes definiciones de nuestra parte para precisar aspectos destacados de una auténtica política opositora.



VI — LAS PRIMERAS MEDIDAS Y ORIENTACIONES DEL NUEVO GOBIERNO

El discurso

En su discurso de toma de posesión el doctor Salvador Jorge Blanco trazó un conjunto de orientaciones, anunció medidas y proyectos evidentemente dirigidos a favorecer en gran escala a importantes sectores del empresariado criollo y extranjero (banqueros, exportadores, productores agropecuarios y agroindustriales, empresas turísticas y mineras), a limitar parcialmente al sector importador privado mediante prohibiciones de renglones superfluos o no prioritarios, y a imponer una pesada carga de sacrificios a los trabajadores asalariados del área pública y privada.

Ese discurso coincide, por un lado, y diverge en sentido negativo, por otro, con los planteamientos contenidos en el Programa del Gobierno de Concentración Nacional.

En primer lugar ratifica una línea que evade absolutamente los cambios estructurales en el marco mismo del sistema, que requiere una economía que él mismo define en "bancarrota" y retoma, casi en todas sus partes, la política económica puesta en práctica a partir de 1966 por el régimen de Balaguer; política que también entró en fase crítica, acentuada a raíz de la depresión de los precios de los productos de exportación (principalmente del azúcar) y del ascenso del recio el petróleo en el año 1975.

La austeridad

Un examen detenido del conjunto de las medidas de austeridad permite apreciar que su principal ingrediente es la decisión de imponer la congelación de Salarios y contener por medios legales-coercitivos las imperiosas reivindicaciones salariales que motivan en los trabajadores los efectos del alza del costo de la vida en los últimos años.

Si en el campo de la administración pública, a pesar de la injusticia que encierra, esa medida puede ser ubicada dentro de los esfuerzos para contrarrestar



un alto déficit heredado de la pasada administración, en el área privada ella esencialmente persigue proteger los altos niveles de beneficios y de acumulación de los empresarios capitalistas a costa de un sacrificio de la clase obrera totalmente injustificado y en detrimento de la libertad sindical, de su lucha reivindicativa y de su capacidad negociadora respecto al sector patronal.

¡Después de un período de cuatro años en que el costo de la vida subió en un 70 por ciento, es sencillamente criminal pedir a los trabajadores que no reclamen aumentos salariales!

Reducción y congelación de salarios

En cuanto a la reducción de una parte de los sueldos de la administración pública, es preciso decir que si bien esa medida se justifica en los niveles más elevados, la misma afecta indebidamente a sectores medios de la burocracia, la tecnocracia y el aparato militar del Estado al incluir sectores con ingresos inferiores a los mil pesos mensuales. Esa medida, al tiempo que representa una reducida economía de aproximadamente 15 millones de pesos anuales, podría reducir los niveles de eficiencia de importantes dependencias estatales al provocar la fuga de técnicos capaces del sector oficial hacia el sector privado y hacia el exterior.

La anunciada "congelación" de las utilidades de las empresas privadas, presentada como "justa" contrapartida de la congelación y la reducción de salarios, se reduce en realidad a que los patronos y accionistas no podrán retirar durante este año utilidades superiores a las del año anterior. Además de que el nivel de beneficios es imposible de cuantificar por el gobierno, tanto más conociendo que usualmente los presentan falsamente como muy reducidos o nulos para evadir los tributos.

La "congelación" de precios planteada también como contrapartida es imposible de sostener sin subsidios estatales, si al mismo tiempo se prometen a los productores del sector agropecuario precios estimulantes.

Estas decisiones gubernamentales contrarían las promesas electorales y programáticas en favor de la "protección del salario real de los trabajadores" y de la "redistribución del ingreso".

NO HAY POR QUE ACEPTAR PASIVAMENTE ESAS MEDIDAS

Con la congelación de salarios se golpea fuertemente a los trabajadores después de un sostenido proceso inflacionario que ha reducido en gran escala el poder de compra del peso.

Tal determinación persigue una protección de los actuales niveles de ganancia del sector empresarial en detrimento de las aspiraciones obreras a una vida mejor.

Al tiempo que justifica sus pretensiones de congelar los salarios, el Dr. Jorge Blanco, en su discurso llama a un "compromiso" de los "sectores empresariales y sindicales influyentes en la actividad económica, a fin de favorecer indudablemente los intereses económicos de los patronos criollos y extranjeros, sector marcadamen-



te beneficiario de la casi totalidad de las medidas que el Dr. Jorge Blanco se propone implementar.

El Partido Comunista Dominicano llama a los trabajadores a orgnizarse con el propósito de frenar la disposición gubernamental.

Y prepararse firme y decididamente para no dejarse confundir por sectores conciliadores que siempre buscan la conciliación de clase para favorecer a los poderosos.

Los trabajadores, sin rechazar ningún método de lucha, no deben limitar sus demandas a simples proyectos de leyes que muchas veces tratan de frenar con táctica dilatoria el movimiento de masa.

El proyecto no sólo congela los salarios de los trabajadores, también congela otras reivindicaciones contenidas en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, por lo cual la lucha no se puede limitar a la disposición de congelación de salarios.

Los grandes y nuevos incentivos a la burguesía

Y mientras a los trabajadores se trata de imponer la congelación de salarios, un importante paquete de favores y estímulos fluye hacia una gran parte de los componentes del bloque social dominante, exceptuando los casos del gran comercio importador y de los grandes propietarios de inmuebles, que por la dimensión de la crisis han sido parcialmente afectados por las prohibiciones de importaciones, los primeros, y por los nuevos impuestos a la propiedad inmobiliaria, los segundos.

La creación de un fondo especial de financiamiento de exportaciones, la eliminación de las restricciones y prohibiciones en ese campo, las anunciadas modificacines a las tasas de intereses bancarios, la igualación de las exoneraciones de materias primas para la industria, la autorización al capital criollo para instalarse en las zonas francas, los seguros agrícolas y ganaderos, la garantía de precios estimulantes para los productores agrícolas y pecuarios; la asignación de un "papel relevante" a la inversión extranjera en la minería, el turismo y la agroindustria; la promoción de las zonas francas, todas esas medidas y orientaciones son reveladoras de los sectores encumbrados que serán favorecidos por las primeras determinaciones del presente gobierno.

Vivienda, empleo y propiedad estatal

En cuanto a la creación de nuevos empleos y los planes de construcción de viviendas populares es preciso destacar que las medidas anunciadas se quedan por debajo de las ofertas contenidas en el Programa de Gobierno.

Para los próximos 6 meses sólo se ha anunciado el financiamiento a través de las Asociaciones de Ahorros y Bancos Hipotecarios de 5 mil viviendas de 18 mil pesos cada una (90 millones en total), evidentemente destinadas a sectores medios.



Un plan estatal "complementario", no competitivo con el de las Asociaciones, ha quedado indefinido y todo esto evidencia una tendencia al incumplimiento de las ofertas de 25 mil viviendas populares anuales y de 80 mil nuevos empleos contenidas en el citado programa.

La descripción de la crisis de CORDE, el CEA y la CDE no estuvo acompañada de medidas y afirmaciones en favor de la recuperación del sector estatal de la economía en el nivel contemplado en el programa.

El peso de la crisis sobre los de abajo

Los aspectos positivos en materia de exigencia de disciplina de trabajo en el sector público, de esfuerzos contra el dispendio y la corrupción administrativa y de control de importaciones no prioritarias, no compensan una orientación esencialmente dirigida a cargar la crisis sobre las masas trabajadoras.

Pero, mientras a los patronos se les obliga (o se aspira a obligar) a que reinviertan sus beneficios, a los trabajadores se les impide que reciben una retribución más justa por su trabajo, o incluso se la reduce.

Esa política económica, ahora con peores condiciones externas y multiplicados los déficits externos e internos, no augura una recuperación significativa de la economía, mucho menos una mejoría del nivel de vida de los dominicanos.

Al evadir los necesarios cambios y reformas estructurales y al asumir el enfrentamiento de la crisis desde una de las concepciones económicas favorables a los intereses de una gran parte de los sectores económicos dominantes, el nuevo gobierno está imponiendo nuevos e inaceptables sacrificios a los trabajadores, a las masas pobres y a sectores medios del país.

De hecho, la crisis está siendo enfrentada exclusivamente como una crisis del sector externo y pretende ser manejada con medidas monetaristas, control de importaciones y estímulos indirectos de limitadísima repercusión sobre un aparato productivo que necesita ampliarse y reorientarse.

La austeridad así diseñada, la congelación de salarios y otras medidas analizadas forman parte de las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional para conceder el préstamo que actualmente se gestiona.

Salvo las prohibiciones a algunas importaciones, las medidas impulsadas por los asesores económicos del doctor Jorge Blanco están preparando el camino a la concertación de los acuerdos con el Fondo; con ellas, el gobierno está cumpliendo por anticipado las "recomendaciones" del Fondo.

La clase dominante necesita dólares para seguir reproduciéndose y sus miras están puestas en las perspectivas que en ese plano ofrece el FMI a costa de la soberanía nacional y de las imperiosas reivindicaciones populares.





Política exterior

En materia de política exterior el doctor Jorge Blanco anunció un dinamismo de contenido indefinido.

Omitió toda referencia a la crisis centroamericana y se cuidó de expresarse incluso en términos tímidamente progresistas sobre esa situación.

Trató el continente americano como un todo sin establecer las notorias diferencias entre sus porciones ubicadas al Norte y Sur del río Bravo.

Especificó la solidaridad con España.

Propuso, haciendo la salvedad de "algunas circunstancias históricas que han herido nuestros sentimientos nacionales", desarrollar "excelentes" relaciones con los EUA.

Dio seguridad al Haití de Duvalier de no inmiscuirse en sus interioridades.

Delimitó las relaciones en el Caribe a las democracias representativas pero al mismo tiempo se pronunció por la solidaridad antillana.

¿No es Cuba una de las principales Antillas?

¿No es necesario y justo normalizar progresivamente esas relaciones?

Todavía ese asunto y todo lo relativo a la necesidad de diversificar las relaciones internacionales de nuestro país, de establecer vínculos con el mundo socialista y con las naciones progresistas del Medio Oriente y de Africa, queda en una gran nebulosa. En ese aspecto perdura la interrogante. Lo demás está claro.

¡A las fuerzas revolucionarias, a las fuerzas avanzadas, les toca demandar una definición de política exterior en ese aspecto, en el mejor sentido.

Libertades públicas

Incluso en el aspecto de las libertades públicas, en un marco general de respeto a éstas, resultado de las luchas constantes de nuestro pueblo, se notan contradicciones en el inicio de este régimen:

Por un lado se toma la decisión de suprimir, al parecer definitivamente, la irritante práctica de incautar libros en el Aeropuerto Las Américas, lo cual es un paso correcto, harto esperado por la ciudadanía.

Pero por otro lado el Presidente da muestras de intolerancia, incluso en los altos niveles oficiales, con una circular que pretende callar la más mínima discrepancia de los funcionarios públicos, lo que resulta reprochable.



VII — ¿COMO ACTUAR?

Toda acción opositora que realmente presione por el cumplimiento de los puntos más positivos del Programa de Concentración Nacional (evidentemente contradictorios con las posibilidades de un régimen destinado a preservar las estructuras capitalistas vigentes), conlleva una permanente vinculación de nuestras exigencias por el cumplimiento de sus ofertas con nuestros planteamientos y proposiciones de reemplazo de estas estructuras.

Si el afán de vigencia electoral condujo al nuevo equipo gobernante a formular ofertas programáticas que encierran esa contradicción entre promesas y posibilidades reales del sistema, nuestro deber es promover un movimiento popular que tienda a desarrollarla en toda su magnitud, tratando de contrarrestar así los efectos de una mediación política del liderazgo perredeísta destinado a apaciguar las luchas sociales con el pretexto de que la crisis no le permitirá cumplir sus promesas.

Para lograr esto la acción de nuestro partido debe incluir la continuidad de los esfuerzos que hacemos junto a otras fuerzas, principalmente el Movimiento Por el Socialismo (MPS) y el Movimiento de Unidad Socialista (MUS), por depurar y ampliar las identificaciones programáticas y de puntos de vista sobre la actual situación política, así como de actividades conjuntas, hasta lograr una unidad de todas las izquierdas capaz de anteponer un proyecto común de los que quieren la revolución, a la tarea de la burguesía y del imperialismo por estabilizar y desarrollar el capitalismo en la República Dominicana.

El Dr. Jorge Blanco y los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano se comprometieron a poner en práctica esas medidas y a cumplir con esos limitados objetivos en el período de gobierno 1982-86.

Ellos deben ser emplazados por las organizaciones políticas y las fuerzas sociales interesadas en esas reivindicaciones a convertir en hechos sus palabras.

Un amplio, diverso y multifacético movimiento de presión debe ser puesto en marcha para convertir en decisiones concretas las promesas y disposiciones programáticas formuladas.

En esa dirección, tomando como referencia nuestro propio Programa y las

demandas y precisiones de mayor alcance que entendemos deben agregarse a esos puntos extraídos del Programa de Concentración Nacional del PRD, se encaminará una parte del esfuerzo de nuestro Partido.

En sentido contrario, a las promesas de protección del salario real se pretende ya imponer a los trabajadores un mayor sacrificio por la vía de la congelación de sus ingresos.

Tan negativos intentos requieren poner en marcha un amplio movimiento que emplace al cumplimiento de ese compromiso electoral, que demande los aumentos necesarios en el salario real para compensar las alzas en los precios de los artículos de consumo.

Ese y otros emplazamientos, la presión de abajo hacia arriba, las movilizaciones sectoriales por el cumplimiento de lo prometido se tornan cada vez más necesarios en la medida el reciente apoyo de Jorge Blanco y Peña Gómez a la intervención económica del Fondo Monetario Internacional revela una fuerte inclinación a renegar de esas promesas y a sustituirlas por dec. siones contrarias a los limitados avances, reivindicaciones y reformas que ellas contienen.

Tal actitud, además, está llamada a generar intensas tensiones sociales que pueden a su vez desatar tendencias represivas adecuadas a los efectos de las antipopulares condiciones que tradicionalmente impone el referido Fondo.

En estas circunstancias procede rechazar esa actitud y emplazar al nuevo equipo gobernante respecto a los aspectos positivos del programa prometido, expresarle nuestra disposición de respaldar su aplicación y emprender las acciones que lo obliguen a cumplir en caso de reticencia o a evidenciar con toda claridad su inconsecuencia si definidamente opta por violar lo prometido; todo esto al compás del desarrollo de una política de oposición que no deje dudas respecto a los objetivos finales de nuestro partido y a su sistemática contribución a un proceso de acumulación de fuerzas que tiene por meta la liberación nacional y social de nuestro pueblo.

Actuaremos con firmeza en esa dirección, procurando para ese emplazamiento la más amplia participación popular, incluida desde luego la de las fuerzas perredeístas que se resistan y luchen contra los incumplimientos del gobierno que ellas eligieron, convirtiendo así en acción política concreta aquel preciso pensamiento de Orlando Martínez: "De aquí hacia atrás, nunca; de aquí hacia adelante, siempre".

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DOMINICANO Sesión Plenaria

Santo Domingo, agosto, 1982.



Proyecto de Digitalización Academia Dominicana de la Historia



Contenido

I— ANTE UN NUEVO GOBIERNO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)

II-- PROFUNDIZACION DE LA CRISIS ECONOMICA

Dos Métodos y una Sola Crisis

El Balaguerismo

El Perredeísmo Tutelado por los Cívicos

El Gasto Público

Indicadores Finales de la Crisis

Caracterización de la Crisis y de las Medidas del Gobierno

Guzmán para Contenerla

III— NUEVOS FACTORES POLITICOS

IV— SIGNIFICADO DEL PROGRAMA DE CONCENTRACION NACIONAL DE SALVADOR JORGE BLANCO

Puntos que Encontrarán Nuestra Oposición Frontal

Puntos que Sirven a la Lucha Inmediata, por las Reformas

Programa Vs. Realidad

Perspectivas Económicas a Corto y Mediano Plazo

La Coyuntura Internacional

Nivel de la Actividad Interna Prevista

Perspectivas Fiscales

V— OPOSICION, ESTRATEGIA Y TACTICA

Estrategia Socialista

Táctica Opositora

VI— LA PRIMERAS MEDIDAS Y ORIENTACIONES DEL NUEVO GOBIERNO

El Discurso

La Austeridad

Reducción y Congelación de Salarios

No hay Porqué Aceptar Pasivamente Esas Medidas

Los Grandes y Nuevos Incentivos a la Burguesía

Viviendas, Empleo v Propiedad Estatal

El Peso de la Crisis Sobre los de Abajo

Política Exterior

Libertades Públicas

VII— ¿COMO ACTUAR?



Proyecto de Digitalización Academia Dominicana de la Historia

